

## **Cesiones de datos en acciones formativas subvencionadas. Informe 50/2006**

La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal efectuado por organizaciones empresariales o sindicales que, dentro de la convocatoria de ayudas para planes de formación, aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 3 de noviembre de 2005, se convierten en solicitantes de esas ayudas y organizan los cursos para sus trabajadores, .

Antes de entrar a analizar las cuestiones planteadas a la luz de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y dado que esta cuestión es planteada por la consulta, debe analizarse el papel de la Fundación Tripartita en la gestión y tramitación de las ayudas a la que la consulta se refiere, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 a) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, las fundaciones del sector público estatal no podrán ejercer potestades públicas.

La creación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo proviene del III Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua, publicado por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de febrero de 2001

Así, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo se constituye como la entidad estatal encargada de impulsar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en materia de Formación Profesional, en el ámbito del empleo y las relaciones laborales, desarrollando sus atribuciones en el marco de la Ley 50/2002.

Por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, de regulación de la Formación Profesional continua, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo cambia su denominación a la de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

En la actualidad, sus funciones le son conferidas por el artículo 21 del Real Decreto citado, y son las que a continuación se relacionan:

- Contribución al impulso y difusión entre empresarios y trabajadores del subsistema de Formación Continua.
- Coordinación y evaluación de las políticas de Formación Continua.
- Elaboración y propuesta de estudios e informes técnico-jurídicos sobre el subsistema de Formación Continua, en el marco del Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
- Elaboración del informe anual y de estadísticas sobre Formación Continua en el ámbito de todo el territorio del Estado.
- Presencia institucional en foros europeos o internacionales.
- Ejecución de las funciones de gestión, apoyo y asistencia técnica que le correspondan.
- Seguimiento y control de las acciones formativas.

Es decir, tiene encomendadas las funciones de gestión, asistencia técnica y seguimiento y control de las acciones formativas, sin perjuicio de las que corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal y a las Comunidades Autónomas en sus ámbitos de competencia.

A la vista de las citadas previsiones, cabe considerar que la actuación de la Fundación en el marco de las ayudas a las que se refiere la consulta será considerada como entidad colaboradora para la gestión de la subvención y estará sometida a las obligaciones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Concretamente el artículo 12.1 de la citada Ley dispone que “Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio. Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior”.

El párrafo segundo aclara quiénes podrán ostentar esta condición, señalando que, “Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, organismos o entes de derecho público y las asociaciones a que se refiere la disposición

adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan”.

En este caso en que las ayudas son concedidas por una Administración, actuando la Fundación como entidad colaboradora en la gestión de la misma, la Administración que concede la ayuda (en el supuesto de la consulta el Servicio Público de Empleo Estatal) tendrá la condición de responsable del tratamiento, es decir quién decide sobre la “finalidad, contenido y uso del tratamiento” (artículo 3.d) de la Ley 15/1999).

En consecuencia, la entidad designada, en su caso, como colaboradora para la gestión y tramitación de las ayudas públicas no actuará en ningún caso en nombre propio, sino en nombre de la entidad concedente, que será la que finalmente resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la concesión de la ayuda. Por tanto, cualquier actuación relacionada con la misma llevada a cabo por la entidad colaboradora será directamente imputable a la concedente.

De este modo, atendiendo a las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, cabe considerar que la Fundación Tripartita tendrá, en el presente caso, la condición de encargada del tratamiento, definida por el artículo 3 g) de la Ley como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

En este sentido, cabe indicar que sin perjuicio de las amplias funciones concedidas a la Fundación por el Real Decreto 1046/2003 y por la propia Resolución de convocatoria, dichas funciones se ejercerían únicamente en cumplimiento de la gestión encomendada a la Fundación, sin que las mismas pudieran ser consideradas como propias de la misma, por lo que la actividad de la fundación se realizaría en nombre de la concedente, el Servicio Público de Empleo Estatal, que sería quien efectivamente resolvería sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

Por todo ello, la actividad desarrollada por la Fundación Tripartita tendría encaje en lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley 50/2002, encontrándose sometida su relación con la entidad concedente a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica.

Consecuencia de todo lo que se acaba de indicar será que la transmisión de los datos de la Fundación Tripartita al propio Servicio Público de Empleo Estatal, concedente de las ayudas no implicará una comunicación o cesión de datos que haya de encontrarse amparada por el artículo 11 de la Ley, toda vez que el artículo 12.1 de la Ley Orgánica dispone que “no se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento”.

Sentado todo lo anterior, debe ahora analizarse la procedencia del tratamiento de los datos de los alumnos asistentes a las acciones formativas que hayan obtenido la correspondiente ayuda por parte de la Fundación, que como se dijo será encargada del tratamiento del que será responsable el propio Servicio Público de Empleo Estatal.

En este sentido, si bien el beneficiario de la ayuda sería la propia entidad o la empresa y no los alumnos o los trabajadores que asistieran a las acciones formativas objeto de la subvención, no puede ignorarse que serán estos los que resulten finalmente beneficiados por la realización de la correspondiente acción formativa, toda vez que la misma redundará en un incremento de sus conocimientos profesionales y en la mejora de su situación curricular.

Del mismo modo, debe recordarse que un elemento esencial del trámite de concesión de subvenciones y ayudas públicas consiste precisamente en la justificación de la realización de la actividad subvencionada, dado que el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar al reintegro de la subvención concedida.

Por tanto, en el presente caso será preciso que por la entidad colaboradora, que actúa, como ya se indicó, en nombre y por cuenta de la concedente, será necesario que se tenga acceso a la información justificativa de la efectiva realización de la acción formativa, lo que en el caso que nos ocupa exigiría el conocimiento de los alumnos que efectivamente han recibido la correspondiente acción.

No cabe ignorar que, si bien los alumnos o los trabajadores serán terceros en la relación que vincula al concedente y beneficiario de la ayuda, la

misma se realiza, precisamente, en beneficio de los destinatarios finales de la actividad subvencionada.

Por este motivo, la comunicación de datos de los alumnos por parte del beneficiario a la entidad a la que se encomienda la gestión de las ayudas, podría encontrar encaje en lo establecido en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, que habilita la cesión de los datos de carácter personal sin precisar el consentimiento de los afectados “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.

En efecto, la participación en las actividades formativas subvencionadas, con conocimiento de esta circunstancia por parte de aquellos supone la aceptación del hecho de que, para que la acción formativa pueda tener lugar, se comuniquen a la entidad encargada de la gestión de las ayudas los datos que acrediten su participación en los cursos, toda vez que, en caso contrario, la actividad no sería beneficiada por la subvención, al no justificarse su efectiva realización. En este sentido, cabe recordar que el número de alumnos y horas lectivas son criterios a tener en consideración para la obtención de la ayuda pública.

Asimismo, será conformes a la Ley Orgánica las comunicaciones que hubieran de efectuarse a los correspondientes órganos que tengan atribuidas las funciones de fiscalización y control de la realización de las actividades subvencionadas y del gasto derivado de la propia concesión de las ayudas, al encontrar la misma cabida en las atribuciones que a dichos órganos otorgan normas con rango de Ley (la Ley General de Subvenciones), lo que implica la aplicación al caso de lo establecido en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.